

# Intelectualidad, política y sociedad: la renuncia a la imaginación política en la transición chilena<sup>1</sup>

Sebastián Caviedes Hamuy\*

## 1. Introducción: la relación entre intelectualidad y sociedad en Chile

En Chile, los intelectuales han tendido a ser “hechos estatales”, tanto por su inclinación a formar parte de la clase política y representar la ideología oficial, como por reconocerse en una función pública destinada a educar a una vasta capa de profesionales y técnicos<sup>2</sup>. Tal estilo se origina en el singular modo por el que se institucionaliza la vida pública del país, imperando más la invariabilidad y la escasez que el dinamismo y la abundancia en la vida cultural, debido al predominio indisputado de la aristocracia local, sustentado en el menor dinamismo económico local, que afecta en la cultura a su vez por la baja tendencia de este grupo a innovar<sup>3</sup>.

Ante aquella falta de exhuberancia, las élites participantes del campo cultural asumen una conciencia más clara de los requisitos que su tarea les impone. Ella, irremediablemente ligada a los derroteros de la acción estatal a causa de la estrechez económica, ha asociado la incorporación a la función pública con una dirección de progreso social nacional<sup>4</sup>, motivo por el cual la colaboración profesional con las políticas oficiales ha predominado por sobre la dimensión más crítica del trabajo intelectual<sup>5</sup>. Presente esta última de todos modos, ha circunscrito sus preocupaciones al marco de la esfera estatal, en virtud de la otra especificidad del proceso chileno: el contraste entre una estructura subdesarrollada y una organización sociopolítica avanzada<sup>6</sup>, originada en una tradición de organización del Estado, distintivamente impersonal en la región, anclada en el temprano ordenamiento portaleano del siglo XIX y que ha sido trascendente como cultura política.

La pronta definición de un marco institucional para la vida cultural nacional, más allá de su magnitud o sofisticación, impone entre la intelectualidad chilena una tendencia hacia la acción colectiva, en contraposición al individualismo

---

<sup>1</sup> Este artículo recoge una parte de la Memoria de Título en Sociología del autor, titulada *Neoliberalismo e intelectualidad en América Latina, 1980-2003. Argentina y Chile*, la que fue presentada en la Universidad de Chile el primer semestre académico del año 2018

\* Universidad de Chile. [caviedioh@gmail.com](mailto:caviedioh@gmail.com)

<sup>2</sup> Brunner, José Joaquín y Ángel Flisfisch. *Los intelectuales y las instituciones de la cultura*. Santiago de Chile, Flacso, 1983.

<sup>3</sup> Halperin Donghi, Tulio. “Estilos nacionales de institucionalización de la cultura e impacto de la represión: Argentina y Chile”. En Saúl Sosnowski (comp.). *Represión y reconstrucción de una cultura: el caso argentino*. Buenos Aires, Eudeba, 1988.

<sup>4</sup> Brunner, José Joaquín. *Las imágenes de la sociedad y la mirada sociológica*. Documento de trabajo N°121. Santiago de Chile, Flacso, agosto de 1981.

<sup>5</sup> Faletto, Enzo. “Enzo Faletto rompe tres décadas de silencio: ‘Necesitamos una nueva ética del comportamiento’” (Entrevista de Faride Zerán). *Rocinante. Arte, cultura y sociedad*, N°41, 2002.

<sup>6</sup> Pinto, Aníbal. *Tres ensayos sobre Chile y América Latina*. Buenos Aires, Editorial Solar, 1971.

presente en otras experiencias latinoamericanas, por ejemplo, la argentina. Y es que, en la medida que ello abre una tendencia a perpetuar la institucionalidad, les permite participar de modo más eficaz en los esfuerzos por afrontar los problemas del momento político<sup>7</sup>.

Socialmente, durante el siglo XX son los sectores medios los que proveen los principales cuadros de la intelectualidad local, y los que ejercen una hegemonía cultural dado el peso que asumen en el Estado, desde donde propician una política de compromisos y redistribuciones del poder social, económico y cultural. Estos grupos fijan el problema de la conformación de la cultura local, y de los grupos y clases que expresan a través de ella su hegemonía, como tema central de la centuria. Lo hacen en torno a un “nacionalismo educativo” y a una preocupación por la unidad nacional, enraizada en la amenaza de una cuestión social cuya traducción práctica es asociada a la lucha de clases en las ciudades y en los centros de concentración proletaria<sup>8</sup>.

Aún así, en el ámbito ideológico, junto con la cuestión nacional, la intelectualidad chilena encuentra sus basamentos en dos tradiciones político-intelectuales diferentes. De un lado, una cultura de raíz oligárquica que perdura en sus transformismos y se difunde como “cultura política” de compromisos hasta la década del cincuenta, y que se encarna en un pensamiento corporativo, de raigambre católica, que promueve, a través del desciframiento del presente a través del pasado colonial, la restauración de un dominio autoritario a la usanza portaleana<sup>9</sup>. De otro, una cultura socialista que, articulada en torno a elementos libertarios y marxistas, acompaña el proceso de constitución cultural de los grupos subalternos, pese a ser sometida, a lo largo del siglo, a un rígido sistema de subordinaciones y exclusiones<sup>10</sup>. Ambas tradiciones, atravesadas por el sentido de crisis y orientación a la acción que caracterizan al pensamiento chileno del siglo XX, las catapulta como idearios sobre y para el espacio de la política<sup>11</sup>.

Dentro de la dinámica social del siglo pasado, la apertura que supone la irrupción de los sectores populares en la vida política desde los años veinte y el ascenso de un proyecto “desarrollista” que busca ampliar y consolidar el mercado nacional en las décadas siguientes, revitaliza y torna central el lazo entre la intelectualidad y un mundo popular organizado que crece. Pero, mientras ese vínculo es pensado de modo asistencialista entre los grupos intelectuales de la tradición cultural oligárquica -en la órbita del ideario socialcristiano e hispanista-, haciendo eco de una preocupación por mejorar la condición social proletaria y que es visible en instituciones como el Partido Conservador o la Iglesia Católica, es solamente en el espectro de la izquierda marxista y sus partidos que ello se piensa y ocurre -no sin dificultades- en virtud de objetivos de democratización social y política.

En efecto, como consecuencia del anclaje social en torno al cual se estructuran tales partidos y organizaciones afines, así como por la naturaleza del

<sup>7</sup> Halperin Donghi, Tulio. *Op. cit.*

<sup>8</sup> Subercaseaux, Bernardo. *Historia de las ideas y de la cultura en Chile*, Vol. 3. Santiago, Editorial Universitaria, 2010.

<sup>9</sup> Correa, Sofía. “El pensamiento en Chile en el siglo XX bajo la sombra de Portales”. Oscar Terán (coord.). *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004.

<sup>10</sup> Brunner, *Las imágenes de la sociedad y la mirada sociológica*, *Op. cit.*

<sup>11</sup> Correa, *Op. cit.*

propio proyecto socialista, el vínculo entre intelectualidad y fuerzas sociales organizadas es un hecho más recurrente. Por lo general, en la forma de un apoyo a la formación y actividad política de estas últimas o mediante la emergencia de cuadros intelectuales cuyo origen de clase se encuentra en los propios sectores populares. Ahora bien, contra imágenes de diverso tipo, en tanto la representación de las organizaciones políticas de la izquierda chilena se limita por mucho tiempo a fracciones específicas del mundo popular organizado, y no a la mayoría, la figura del “intelectual comprometido” constituye una excepcionalidad en el curso histórico chileno<sup>12</sup>.

La ampliación del interés de la intelectualidad chilena por la democratización e integración de los sectores populares se corresponde con el ciclo de acelerada modernización que avanza entre los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Uno en el que juega un rol fundamental la fracción de la intelectualidad surgida del proceso de fundación, institucionalización y profesionalización de las ciencias sociales, liderada por sociólogos y economistas, que consolida un circuito de reproducción de académicos y estudiantes<sup>13</sup>. Varios de ellos, orientados a la producción de soluciones técnicas para los “problemas nacionales” (agrícolas, industriales, educativos) y al análisis global de la sociedad a través de la investigación empírica, vertebran el discurso ideológico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tras un sentido común sociológico que habla de una “crisis integral” de la sociedad en términos de valores y estructuras. En ese sentido, por primera vez en el siglo XX se perspectiva un futuro de revolución de las estructuras heredadas del pasado decimonónico<sup>14</sup>.

El acceso al poder de esta intelectualidad se produce con un bagaje de ideas surgido del despliegue de la mirada sociológica, que encuentra en la imagen de la sociedad ofrecida por la investigación social y económica un modelo de acción que la lleva a proponer, a la vez, un proyecto revolucionario y de integración social<sup>15</sup>. Su acceso se fortalece por la cercanía entre académicos y profesionales de organismos internacionales con los políticos, particularmente del PDC y del PS, y por el efecto de la Reforma Universitaria sobre el acercamiento entre política y ciencias sociales. Este último, se acentúa y tensa en torno a la concepción del

---

<sup>12</sup> No supone negar episodios específicos de radicalización intelectual que dan lugar a expresiones concretas de la denominada “alianza entre trabajadores manuales e intelectuales”, base de la cultura socialista. Por ejemplo, el proceso que origina el Frente Popular y, antes, el Partido Socialista de Chile (PS).

<sup>13</sup> Garretón, Manuel Antonio. *Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina*. Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2014.

<sup>14</sup> Correa, Sofía. *Op. cit.* En torno a la idea de “crisis”, desde la Generación del Centenario en adelante se adjudican los logros del siglo precedente al autoritarismo estatal de sus inicios. En los sesenta, sin embargo, por influencia del marxismo y del estructuralismo, las voces críticas se reorientan. De ahí que la ambigua noción de “comunitarismo”, sobre la que se erige el proyecto del PDC, asome como una especie de deriva progresista de última hora, que expresa la síntesis entre la ideología del desarrollo económico de la Cepal y elementos del socialcristianismo previo. Tal apuesta, que no prospera políticamente, estrecha la relación entre proceso político y proceso social en las ciencias sociales chilenas, en una mezcla que mantiene rasgos de tecnocratismo y del clientelismo característico del antecedente conservador del PDC. Véase Yocolevzky, Ricardo. “La Democracia Cristiana chilena. Trayectoria de un proyecto”. *Revista Mexicana de Sociología*. Vol. 47, n°2, abril-junio de 1985.

<sup>15</sup> Brunner, *Las imágenes de la sociedad y la mirada sociológica*, *Op. cit.*

socialismo tras el triunfo de la Unidad Popular, al proponerse avanzar hacia aquél por la vía legal<sup>16</sup>.

En la heterogeneidad de las clases medias, también juegan un papel relevante las humanidades, especialmente los historiadores y educadores. Los primeros, particularmente aquellos ligados a la corriente historiográfica marxista “clásica”, delinean el devenir teleológico de la clase trabajadora chilena en su camino a la emancipación revolucionaria, dando coherencia al discurso orgánico de las vanguardias políticas socialista y comunista, de la que muchos de sus miembros fueran eximios militantes. Una mirada historiográfica que definió, además, varios de los tópicos claves del discurso de izquierdas de la época -entre ellos, la idea del latifundio como estructura determinante del subdesarrollo local o el papel nefasto de la asimetría económica y la inversión extranjera-, a su vez definidos como tareas pendientes<sup>17</sup>. Los educadores, por su parte, en un contexto de estrecho vínculo entre universidad y sociedad, y fundamentalmente a través de la labor del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, se convierten en uno de los principales mediadores entre lo social y lo político en el mundo popular, dada la orientación históricamente modernizante de la izquierda chilena<sup>18</sup>.

El golpe militar de 1973 pone freno a este derrotero, fundamentalmente, porque la dictadura trastoca los modos de reproducción social y producción cultural de estas élites políticas e intelectuales. Más aún, en un escenario en el que confluyen las críticas de la izquierda europea occidental a los países socialistas, las elaboraciones posmodernas, la crisis del marxismo y la urgencia del problema de la democracia, se crean las condiciones para que se produzca un cambio intelectual y político funcional a la temprana implantación del neoliberalismo en Chile.

## **2. La renovación del carácter social de la política chilena: la crisis intelectual socialista**

La desarticulación social y política experimentada por los partidos de la oposición a la dictadura -especialmente el Partido Comunista (PC) por su enraizamiento popular y aquellas formaciones nacidas en las postrimerías de los años sesenta (MAPU, MIR e IC)-, crea las condiciones para que los intelectuales asuman un liderazgo inédito y sin contrapesos en el seno de estas organizaciones, permitiéndoles definir, en buena medida, los términos de la transición democrática chilena.

Esto lo hacen mediante la elaboración de una teoría política de la transición que viabiliza la vía de la negociación con el régimen a partir del reconocimiento del marco constitucional establecido, completando un relato sobre el cambio social y político que predomina en los años siguientes<sup>19</sup>. Esta teoría política se construye

---

<sup>16</sup> Huneeus, Carlos; Cuevas, Rodrigo; y Francisco Hernández. “Los centros de investigación privados (think tanks) y la oposición en el régimen autoritario chileno”. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, Vol. 23, N°1, 2014.

<sup>17</sup> Pinto, Julio. *La historiografía chilena durante el siglo XX: cien años de propuestas y combates*. Santiago de Chile, América en Movimiento, 2016.

<sup>18</sup> Debo y agradezco esta observación al historiador Luis Thielemann.

<sup>19</sup> Ruiz, Carlos. “Socialismo y libertad: notas para repensar la izquierda”. Faride Zerán (ed.). *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2017.

mediante el establecimiento de una concepción particular de la política, que define los actores que legítimamente pueden (y deben) desempeñarse en ella. Su realización trae aparejada una doble ruptura con las formas asumidas por la política chilena desde los años cuarenta. Por un lado, una escisión entre lo político y lo social, que torna excluyente el acceso a la política; y, por otra, una escisión entre lo político y lo intelectual, que reduce la dimensión imaginativa de la política a la administración, la “gestión experta” y la racionalidad del mercado, en reemplazo del debate racional que confronta proyectos de sociedad alternativos.

Tales rupturas sientan las bases tanto para los acuerdos y concesiones posteriores que, cristalizada en una “transición pactada”, establece la élite política opositora con el legado de la dictadura, como para las definiciones políticas y económicas propias que adoptan los nuevos gobiernos civiles desde los años noventa.

## **2.1. Pragmatismo y profesionalización de la política: la escisión de lo social y lo político**

La represión sobre los partidos políticos que lideraron el gobierno de la Unidad Popular y el carácter desestructurante de la instalación neoliberal sobre las identidades sociales nacional-populares<sup>20</sup>, otorgan un papel central a franjas reducidas de políticos e intelectuales que, dentro y fuera del país, asoman con la responsabilidad de construir una oposición política al régimen. Al avanzar los años ochenta, en tanto la viabilidad para reconstruir tal oposición pasa a depender cada vez más de la ayuda internacional y del trabajo intelectual -única forma pública y tolerada de hacer política, a causa de la represión<sup>21</sup>-, la importancia de los intelectuales se acrecienta, puesto que, en tanto se mantiene la ilegalización de los partidos políticos de izquierda, los centros académicos independientes, que albergan a intelectuales expulsados de las universidades y a políticos reconvertidos al trabajo intelectual, se convierten en focos de resistencia a la dictadura. En efecto, en la medida en que mediante ellos se logran vehicular recursos económicos y políticos y un trabajo intelectual sistemático, se convierten en los principales lugares de encuentro de la oposición, rebasando su inicial objetivo como espacios de refugio transitorio<sup>22</sup>.

Siendo los centros académicos independientes un fenómeno transversal dentro de las identidades políticas de la oposición, es en torno al proceso de renovación socialista que emerge el pensamiento que dota de sentido y proyección a la transición a la democracia chilena. Un proceso político e intelectual que supone un giro desde concepciones marxistas hacia otras socialdemócratas (vinculado al giro ideológico de algunas izquierdas europeas), y que, pese a anclarse en el PS, lo excede con largueza. En Chile, además, es un proceso en el que los intelectuales vinculados al PS pugnan por su propio ascenso en las estructuras de poder y en el proceso político en curso, que luego se proyecta hacia la transición y los venideros

---

<sup>20</sup> Ruiz, Carlos y Giorgio Boccardo. *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago de Chile, Ediciones El Desconcierto – Fundación Nodo XXI, 2014.

<sup>21</sup> Puryear, Jeffrey. *Pensando la política. Intelectuales y democracia en Chile, 1973-1988*. Santiago de Chile, Uqbar Editores, 2016.

<sup>22</sup> Silva, Patricio. “Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the Cieplan Monks”. *Journal of Latin American Studies*. Vol. 23, n°2, 1991.

gobiernos civiles<sup>23</sup>. Esos intelectuales se abren espacio en la reconfiguración de la élite nacional durante la transición, desplazando a las burocracias partidarias vinculadas a la conducción de organizaciones sociales, lo que ayuda a imponer un sello elitista sobre el proceso político y a marginar a las dinámicas tradicionales ligadas a estas últimas<sup>24</sup>.

La renovación socialista trae un cambio de los liderazgos dentro de la propia izquierda. En la segunda mitad de los ochenta, es el ascenso de dicho liderazgo, que tiene lazos más débiles con las bases sociales movilizadas, el que acrecienta su peso sobre el proceso de transición y gravita en la configuración del sistema político democrático. Es un desarrollo en el que pierden poder las burocracias partidarias ligadas a dichas bases sociales. Así, la precariedad adolecida por una izquierda desarticulada -cuyas dirigencias son asesinadas o sobreviven clandestinamente- dota a los intelectuales y políticos que sortean el asedio de la dictadura de un inédito escenario en el que la determinación mutua del eje social con el ideológico, típico del período previo, se torna prácticamente inexistente.

En esas circunstancias, el proceso de renovación socialista deviene central en la producción de un relato asociado a la transición y a la propia democracia, y en la reformulación de los idearios políticos, en consonancia con los intereses elitarios apostados en el pacto de la transición. Se habla, así, de una “intelectualidad orgánica de la democracia”, que impone una idea de esta reducida a sus dimensiones político-formales, al omitirse las sociales y económicas, consideradas como fuente de riesgos para las primeras<sup>25</sup>.

Los grupos político-intelectuales que forman parte de la renovación socialista son mayoritariamente parte de la facción de la izquierda chilena que leyó el golpe de Estado como un fracaso estratégico y no como una derrota. En torno a esa diferencia encabezan, desde la segunda mitad de los años setenta, una dura autocrítica al pensamiento de izquierda, su proyecto, las formas y las ideas matrices que lo articularon, con el fin de refundar ideológica e identitariamente a este sector<sup>26</sup>.

En la década siguiente, tal acción avanza, tras analizar los cursos de transformación impulsados por la dictadura, hacia una *nominación* del futuro, en la

---

<sup>23</sup> Ortiz, Edison. *El socialismo chileno: De Allende a Bachelet (1973-2005)*. Santiago de Chile, Alerce Talleres Gráficos, 2007.

<sup>24</sup> Ruiz, “Socialismo y libertad: notas para repensar la izquierda”, *Op. cit.*

<sup>25</sup> Baño, Rodrigo. *Lo social y lo político. Un dilema clave del movimiento popular*. Santiago de Chile, Flacso, 1985.

<sup>26</sup> Junto a la facción del PS que renuncia al marxismo-leninismo como eje político-teórico, hay diferencias dentro de otros partidos más pequeños como el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) (surgido, a fines de los sesenta, de la escisión del sector “rebelde” o más izquierdista del PDC, y que tuvo una participación directa en la experiencia de la Unidad Popular como parte de la coalición de gobierno). Así, es posible diferenciar entre los miembros del MAPU Obrero Campesino (corriente de tendencia más moderada y afín al Partido Comunista), anclados en la Flacso, y cuyas temáticas fueron la organización del Estado y el sistema político en general; y del MAPU Garretón (corriente de tendencia más radical, que adopta el marxismo-leninismo), anclados en el centro de estudios SUR, quienes se enfocaron en el sujeto y sus transformaciones internas y la sociedad civil. Véase Moyano, Cristina. *El MAPU durante la dictadura: saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la Renovación Socialista en Chile (1973-1989)*. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010.

que se incluyen el deber ser de la política, el futuro de la nación y la salida a la dictadura<sup>27</sup>. Una que se hace en diálogo con el pasado reciente, dado que se apoya en una lectura crítica de la política nacional-popular chilena, emergiendo desde allí, influido por los avatares del proceso de transición a la democracia, una particular concepción de la política, que niega el vínculo de ésta con lo social, naturalizando las condiciones excepcionales vividas en dictadura, cuando predomina la ausencia de control ideológico de los partidos y, por ello, la autonomización del rol del intelectual respecto a estos<sup>28</sup>.

El primer paso para la legitimación teórica e histórica de una concepción de este tipo es la crítica a la izquierda de la Unidad Popular por desatender a las capas medias. Se apunta con ello tanto a lo estéril de un intento de revolución socialista que no contara con las mayorías necesarias, como a que ese déficit político habría funcionalizado el malestar de tales sectores en favor de la reacción que origina el golpe militar<sup>29</sup>. Tempranamente, ello empuja dentro del pensamiento renovado la idea de que el problema político para la articulación de cualquier oposición es la amplitud de la alianza política, entendida básicamente como el establecimiento de un vínculo con el Partido Demócratacristiano (PDC). Como corolario, además, en tanto es la izquierda la más debilitada, se asume que ella debe realizar las mayores concesiones<sup>30</sup>. Se abre, de este modo, un amplio espacio para la crítica no sólo de la experiencia de la Unidad Popular, sino de las estrategias clásicas de la izquierda, de los actores que se privilegiaban desde el marxismo y, más adelante, de la mayor parte de sus premisas. No sólo se impugnan las visiones que apuntaban a la necesidad de haber dotado de una defensa armada al gobierno de Allende, sino que a la estrategia de alianza de clases que la vertiente liderada por el PS sostuvo hasta 1973: el Frente de Trabajadores<sup>31</sup>. Asimismo, se les achaca a las estrategias de cambio de la Unidad Popular el haberse “saltado” las instancias parlamentarias y el principio de negociaciones y transacciones del sistema político, alienando más a las capas medias<sup>32</sup>.

La otra gran crítica que recorre al pensamiento renovado se dirige al funcionamiento del sistema de partidos durante el siglo XX, y que permite la instalación, durante la década, del principio de autonomía de lo político, bajo una concepción de la democracia posible basada en la conformación de un bloque por los cambios que no debía articularse en torno a un proyecto ideológico, sino que pragmático y coyuntural<sup>33</sup>. En efecto, el núcleo del cuestionamiento compartido

---

<sup>27</sup> *Ibíd.*

<sup>28</sup> Baño, *Op. cit.*

<sup>29</sup> Moulian, Tomás. “Desarrollo político y Estado de Compromiso. Desajustes y crisis estatal en Chile”. *Estudios Cieplan*. N°8, 1982; Garretón, Manuel Antonio. *El proceso político chileno*. Santiago de Chile, Flacso, 1983.

<sup>30</sup> Ruiz, “Socialismo y libertad: notas para repensar la izquierda”, *Op. cit.*

<sup>31</sup> Alvear, Fernando. “Genealogía de una ruptura. El proceso de la renovación socialista en Chile”. *Revista de Ciencias Sociales*, N°36, 2016.

<sup>32</sup> Garretón, Manuel Antonio. “La revolución como contenido, sin método revolucionario”. Rodrigo Baño (ed.). *Unidad Popular 30 años después*. Santiago de Chile, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 2003.

<sup>33</sup> Moyano, *Op. cit.* El pragmatismo de “lo políticamente responsable”, entendido como moderación política, es una de las cuestiones que produce en la izquierda una revaloración de la democracia y de los derechos humanos. En particular, se usó a Gramsci para hablar de la “autonomía de lo político” frente a los esquemas simplistas y mecanicistas. Para una

por los intelectuales que intervienen en este debate es hacia un tipo de politización que tendió a asumir que “todo es político”, en el sentido de que sólo lo político -en particular, el vínculo con los partidos y, en ese sentido, con proyectos ideológicos- torna legítimo a lo social. La estructura político-partidaria habría estado imbricada con el conjunto de las organizaciones sociales, lo que habría debilitado y hecho dependiente a las organizaciones autónomas de la sociedad civil, al tiempo que habría impuesto como fundamento incuestionable la subordinación de todos los ámbitos de la vida social a la política, validando como actores legítimos sólo a aquellos con capacidad de expresarse en la esfera pública a través de partidos.

Tratándose de un tipo de politización aún presente en el Chile de comienzos de los años ochenta, en momentos en que se buscaba articular una oposición política efectiva a la dictadura, los intelectuales de la renovación socialista proponen salidas a menudo disímiles. Así, para Manuel Antonio Garretón debía superarse esta imbricación entre política y sociedad entendiendo al momento político-partidario solo como uno más, al tiempo que la oposición debía sobreponerse a la falsa dicotomía entre el partido como refugio político (alejado de la relación con lo social y, por ello, como una vanguardia) y el movimientismo que subsume en él lo político o posterga su disputa<sup>34</sup>. Por el contrario, para Eugenio Tironi, la modalidad del “todo es política” no sólo era errada, sino que constituía un sinsentido, en tanto la política había devenido una actividad profesional, por el grado de institucionalización en que se encontraba. A su modo de ver, una visión así impedía la acción creadora de orden y consensos, pues aislaba a la oposición y llevaba a la izquierda al “segundo fracaso” de mantenerse resistiendo a la dictadura, cuando debía asumir las transformaciones radicales que ésta había impulsado<sup>35</sup>.

Desde 1983, a partir de las jornadas de protesta, el impulso de las movilizaciones y la violencia urbana, se produce una bifurcación que, al interior de la oposición al régimen, origina dos estrategias políticas. Por un lado, la del pensamiento “renovado” y el PDC, que privilegia la “salida pactada” con el régimen y en la que predomina un contenido normativo en torno al consenso político, en contra de un proyecto ideológico, -ello, reforzado tras el año 1986, por el diagnóstico del fracaso tanto de la supuesta salida insurreccional armada<sup>36</sup> propiciada por el PC (incautación de arsenal del FPMR en Carrizal y atentado fallido a Pinochet) como por la idea de ingobernabilidad política por la vía de movilizaciones populares (al decaer la participación en las protestas)<sup>37</sup>. Por otro,

---

crítica a este uso, véase Faletto, Enzo. “¿Qué pasó con Gramsci?”. *Nueva Sociedad*. N°115, 1991.

<sup>34</sup> Citado en Moyano, *Op. cit.*, p. 134.

<sup>35</sup> Tironi, Eugenio. “Anotaciones sobre el cambio social y la política” (agosto de 1983). En *La torre de Babel. Ensayos de crítica y renovación política*. Santiago de Chile, SUR Ediciones, 1984.

<sup>36</sup> Como ha mostrado Luis Rojas Núñez, lo de una “insurrección popular armada” para derrotar a la dictadura está lejos de ser el proyecto político del PC (y, con ello, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, su aparato militar entre fines de 1983 y mediados de 1987, cuando este último se autonomiza) para el período 1980-1989. En realidad, esta idea debiese ser vista como parte de la propia teoría de acceso al poder de la “intelectualidad orgánica de la democracia”. Véase Rojas Núñez, Luis. *De la rebelión popular a la sublevación imaginada*. Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2011.

<sup>37</sup> Moyano, *Op. cit.*



justamente la estrategia liderada por el PC, que asumía que la transición debía hacerse con bases movilizadas para arribar a una democracia avanzada<sup>38</sup>.

La presión interna y externa -pese al endurecimiento de la represión y la declaración de Estado de Sitio que supone el “reordenamiento institucional” tras la política de apertura de Jarpa<sup>39</sup>- apura una táctica de repliegue militar, que estimula no sólo un mayor fraccionamiento de la oposición, sino que anima a justificar las diferencias y elaborar una teoría de acceso al poder<sup>40</sup>. Los grupos medios opositores, más capaces de resolverlo, la formulan. En cambio, la vía de movilización popular carece de ello<sup>41</sup>, entrampada en la polaridad entre una acción política de resistencia pública o la ‘reconstrucción del movimiento popular por la base’<sup>42</sup>. El colapso ideológico de la izquierda y de la idea de socialismo, apuran su derrota y exclusión de la transición negociada. La oposición política busca un diálogo apuntando a la amenaza de desintegración que porta la rutinización de las protestas, mientras se alega que en el “movimiento poblacional” coexisten, junto a la desclientelización forzada, procesos de desintegración orgánica bajo las transformaciones ocurridas que, más que un movimiento propiamente tal, indican una anomia políticamente inconducente<sup>43</sup>.

La preocupación de los sectores que atizan la salida pactada apunta a que las protestas marginales puedan poner en peligro la transición a la democracia. Esta es la pregunta que recorre, por ejemplo, el seminario *Movimientos sociales urbano-populares y procesos de democratización*, organizado por SUR y reproducido en el número 14 de la revista *Proposiciones*, de agosto de 1987. Tironi dirá en su ponencia:

---

<sup>38</sup> Álvarez, Rolando. *Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura, 1965-1990*. Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2011.

<sup>39</sup> Entre 1983 y 1984, tras el ascenso del político de derecha Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior, tiene lugar un breve período de apertura política en el que, además de producirse el surgimiento de diversos partidos, movimientos y coaliciones políticas de izquierda y derecha (producto sobre todo de la flexibilización del exilio, que permitió el retorno de importantes líderes de la oposición), se inician conversaciones para consensuar acuerdos que permitieran el reinicio de la actividad política legal en el país. Su fin abrupto se produjo tras el anuncio de Pinochet de que no había posibilidad de hacer cambios a la Constitución. Véase Huneeus, Carlos. *El régimen de Pinochet*. Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 2000, pp. 513 y ss.

<sup>40</sup> Ruiz, “Socialismo y libertad: notas para repensar la izquierda”, *Op. cit.*

<sup>41</sup> Salazar, Gabriel. *La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”*. Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2006.

<sup>42</sup> Garcés, Mario. “ECO, las ONGs y la lucha contra la dictadura militar en Chile. Entre lo académico y lo militante”. *Izquierdas*, N°7, 2010.

<sup>43</sup> El estudio que definió en buena medida esta caracterización es *Pobladores: luchas sociales y democracia en Chile*. Obra originalmente publicada en francés en 1989, presenta los resultados de la “intervención sociológica” -método touraineano de estudio de los movimientos sociales- realizada al movimiento de pobladores chileno entre 1985 y 1986 en Santiago. Esta investigación fue financiada por el Ministerio francés de Asuntos Extranjeros, por intermediación de Alain Touraine, cuyo laboratorio, el Cadis de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, se asoció a SUR. Véase Cortés, Alexis. “Prólogo. La intervención sociológica con pobladores, 30 años después”. François Dubet, Eugenio Tironi, Vicente Espinoza, y Eduardo Valenzuela. *Pobladores: luchas sociales y democracia en Chile*. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2016.

Los pobladores, por tanto, son una representación de ese fenómeno aparentemente abstracto de la desintegración social. La reacción que provocó la agitación de las poblaciones en el resto de la sociedad -en especial en los grupos medios-, reveló a su vez cómo la violencia social actualiza la amenaza de la disolución de la comunidad; y cómo ese peligro se transforma luego en respaldo a una solución autoritaria. La agitación de los pobladores, en fin, mostró que el problema de la democracia en Chile está indisolublemente unido a la tarea de suministrar bases de cohesión material, institucional y moral a la nación.<sup>44</sup>

Haciendo eco de las formulaciones que explican el fracaso de la Unidad Popular por la falta de apoyo de las capas medias, se difunde la idea de que la violencia urbana puede volver a alienarlas, aunque ahora de la recuperación de la democracia, empujándolas a respaldar la permanencia del autoritarismo.

Pese a que ciertos sectores de la intelectualidad renovada les reconocen a las movilizaciones sociales el haber reconstruido la sociedad civil parcialmente y transformar los regímenes militares (la “transición invisible”), se asume de modo general que ello no es suficiente para lograr el término de la dictadura: “sin momento político, no hay fin de la dictadura y transición democrática”, dirá Garretón<sup>45</sup>. Ahora bien, ¿de qué trata ese ‘momento político’? Pese a la existencia de voces dentro del pensamiento renovado que habrían defendido la combinación y el carácter dialéctico de la relación entre las movilizaciones sociales y procesos políticos (institucionales e ideológicos) específicos<sup>46</sup>, la interpretación que se impone para explicar el carácter de las protestas populares deja sin margen a tal alternativa. Y es que, junto a la nominalización del “movimiento poblacional” como una expresión del deterioro de los lazos sociales a raíz de las transformaciones provocadas por la crisis económica, se generaliza como explicación del debilitamiento paulatino de las protestas populares el hecho de que estas *mezclan* demandas por democracia con otras por democratización. En este esfuerzo por separar, el ‘momento político’, la transición termina asociándose exclusivamente con la dimensión institucional de lo político, homologándose aquello a una tarea que debiese asumir la ‘clase política’ que lidere tal proceso. Al respecto, nuevamente Tironi será el más elocuente, cuando, sintetizando las conclusiones emergidas del seminario antes mencionado, afirme que la transición a la democracia:

equivale al procedimiento a través del cual la clase política -en toda su variedad- se pone de acuerdo en cómo dar término a un régimen autoritario. Y este proceso debe ser reconocido como distinto al de la elaboración de respuestas para otros problemas sociales o económicos” [Bajo esa premisa] “sería necesario, entonces, reconocer la transición como un momento político, que requiere de una (momentánea) desarticulación entre lo político y lo social. Tal ruptura, sin embargo, sólo aparece posible a condición de que también se rompa el

---

<sup>44</sup> Tironi, Eugenio. “Pobladores e integración social”. *Proposiciones*, N°14, 1987, p. 65.

<sup>45</sup> Garretón, Manuel Antonio. “Las complejidades de la transición invisible. Movilizaciones populares y régimen militar en Chile”. *Proposiciones*, N°14, 1987, p. 131.

<sup>46</sup> *Ibíd.*

*imaginario político latinoamericano, que confunde democracia (noción que alude al campo político institucional) con democratización (noción que alude, en cambio, al campo socioeconómico)” (cursivas propias).<sup>47</sup>*

El precio a pagar para alcanzar la democracia formal, entonces, es la subordinación de las demandas sociales a las exigencias del orden político, es la postergación de la democracia sustantiva. Se instala, así, la exigencia de escindir lo social y lo político.

Con todo, el proceso de construcción de una legitimidad social y política no está completo si solo se sustenta en la negación de las alternativas, en este caso, en la negación de la estrategia de transición por la vía de movilización popular. Más bien, necesariamente debe ser elaborada, como parte de ese proceso de construcción ideológica, una justificación *en positivo*, que identifique material y teóricamente a lo que se antepone a esa alternativa. En el caso de la transición a la democracia chilena, tal justificación se afirma, materialmente, en la existencia de una clase política y, teóricamente, en el carácter profesionalizante de la política.

En efecto, abierta la puerta a la idea de escindir lo social y lo político, tal tesis se fragua en el supuesto carácter profesionalizante de la política, que, de ser esbozado a comienzos de los años ochenta como superación del tipo de politización que predomina en la etapa nacional-popular chilena, se torna en táctica para fortalecer el relato de acceso al poder de esta parte de la oposición<sup>48</sup>. Así, el ‘momento político’, ese que pondría fin a la dictadura, aunque capitalizando lo logrado por las movilizaciones sociales, pasa a ser propiedad de un partido o de una coalición. Instrumentos que, sin embargo, a partir de la justificación comentada, son reducidos a los avatares y las decisiones de una clase política que debe escindirse de su base social -dado que no necesita someter sus decisiones a la deliberación de ésta- y, por ello, puede suplantarla al instrumentalizar el contenido de sus demandas. Se justifica la elitización de la política que se proyecta hacia los gobiernos civiles.

Bajo estos términos, se llama a acelerar la transición a fin de establecer un mínimo de legitimidad social. El itinerario de esta es aceptado por la mayoría de los partidos opositores, prevaleciendo en el sindicalismo, los colegios profesionales y las federaciones estudiantiles. Así, la transición pactada avanza aislando a los grupos marginales y sus movilizaciones, lo que permite un control del proceso en manos del centro político y los sectores medios. Se reconstituyen rápidamente los partidos, mientras en el seno del régimen no hay cohesión entre los adherentes civiles de este tras la figura de Pinochet.

La derrota de la estrategia por la vía de movilización popular, entonces, es total. Y es que, contra el mito según el cual el plebiscito de 1988 es impuesto a la dictadura por la movilización social, cabe recordar que aquél estaba previsto en el itinerario transicional definido por la Constitución de 1980, que entra en vigor el

---

<sup>47</sup> Tironi, Eugenio. “Marginalidad, movimientos sociales y democracia. Introducción”. *Proposiciones*, N°14, 1987, p. 17.

<sup>48</sup> Tironi, en 1983, decía: “la política no es una actividad masificable, como se hace creer desde su versión imperialista. En efecto la política ha devenido una actividad profesional, que exige vocación y talento especiales, precisamente por el grado de institucionalización en que se desenvuelve”, véase Tironi, Eugenio. *La torre de Babel. Ensayos de crítica y renovación política*. Santiago de Chile, Ediciones SUR, 1984, p. 67.

11 de marzo de 1981<sup>49</sup>. De tal suerte, la construcción de un relato de exclusión de la movilización popular tiene mucho más que ver con los términos en los que se negocia la “transición pactada”, que con la real potencialidad política de las protestas. Dicho de otro modo, la atención a los peligros que entrañaría la violencia urbana (que llevan a retomar la lectura sobre el fracaso de la Unidad Popular) encuentra su sentido en la posibilidad de que no se respete lo definido con los militares y civiles del oficialismo.

La dictadura y sus transformaciones terminan con las bases sociales e intelectuales de la determinación mutua del eje social con el eje político-ideológico, que caracterizó a la etapa nacional-popular chilena en el siglo XX. Una serie de estrategias, mayoritariamente producidas en el seno del proceso de renovación socialista, definen los términos de una modalidad de transición a la democracia que es excluyente, puesto que apela a postergar toda discusión sobre proyectos de sociedad alternativos al modelo dejado por la dictadura. Ello, para lograr el máximo número de adherentes hacia la recuperación de la democracia política, representativa y formal.

### **2.1. La escisión de lo intelectual y lo político o la legitimación de sí mismos**

Se ha dicho que, en la “teoría política de la transición”, que fija la escisión entre lo social y lo político, se asume la necesidad de una élite que conduzca tal proceso, en función del peso que se le otorga a una cierta profesionalización de la política que contrasta con la situación previa al golpe de Estado. Ahora bien, ¿quiénes son los actores que pueden, legítimamente, formar parte de esa élite de poder? ¿Qué características deben poseer? Responder aquello también es parte de esa misma teoría. El carril por el que se conforma tal respuesta nuevamente apela a una lectura crítica del pasado y a una normatividad sobre el presente y futuro que atañe a la oposición al régimen. Esta vez, sin embargo, su foco está puesto en la relación entre los intelectuales y la política.

Entre 1976 y 1983, el pensamiento renovado -y la izquierda en general- enfoca su crítica en la figura del “intelectual comprometido” y en la visión del marxismo como teoría, doctrina y teleología<sup>50</sup>. La crítica de fondo, como lo va a señalar Tomás Moulian, es que en el pasado la izquierda tendió a igualar teoría y verdad<sup>51</sup>. Una crítica compartida por José Joaquín Brunner, para quien, previo al golpe militar, se habría institucionalizado en los partidos una clausura cultural que habría dado lugar a una diferenciación marcada entre ‘políticos’ e ‘intelectuales’, entre cuadros y teóricos, cada cual, con sus cotos demarcados, con sus cuotas de influencia burocrática y medios típicos de acción<sup>52</sup>. En ese sentido, refiriéndose a la importante influencia de la sociología en los años sesenta, a su juicio, ello se

---

<sup>49</sup> Thielemann, Luis. “Sobre la situación histórica del plebiscito de 1988”. *Revista Red Seca*, 6 de octubre de 2015. Tal período debía durar lo mismo que una presidencia normal, es decir, ocho años según el texto original, y al finalizar debía realizarse un plebiscito respecto de la figura que propusiera la Junta Militar para dirigir el Gobierno. El plebiscito debía hacerse noventa días antes de que finalizara el período presidencial, vale decir, antes del 11 de diciembre de 1988.

<sup>50</sup> Moyano, *Op. cit.*

<sup>51</sup> Moulian, Tomás. *Cuestiones de teoría política marxista. Una crítica de Lenin*. Documento de trabajo N°105. Santiago de Chile, Flacso, diciembre de 1980.

<sup>52</sup> Brunner, *Las imágenes de la sociedad y la mirada sociológica, Op. cit.*

originaba en el caso de la cultura socialista en la manera en que el marxismo se hallaba codificado en Chile, entendido como empresa de difusión de un precario tradicionalismo que entendía la acción cultural de un modo compartimentalizado:

cuando la mirada sociológica asume el horizonte del socialismo como posibilidad histórica concreta, lo hace más por adscripción que por logro, e involuciona sobre un campo teórico -el del marxismo- cuya fragmentación en el mundo entero imponía la necesidad de nuevas adscripciones y ubicaciones, para dar paso a identidades que venían urgidas por las pugnas políticas en el interior de la conducción revolucionaria. Ocurría entonces que la propia identidad de los grupos intelectuales que trabajaban en el campo de las ciencias sociales tendía a producirse en la simultaneidad de una definición teórica que, a la vez, se expresaba como determinación en el campo de la política concreta; todo ello mediado por un único discurso marxista, cuya unidad aparente era preciso mantener, al menos como metalenguaje que hiciera posible la comunicación de lo diverso. Así, sociologismo e ideologismo resultaban una y la misma cosa.<sup>53</sup>

Había, por tanto, no sólo una confusión de planos entre teoría y verdad<sup>54</sup>, sino una entre lo que hoy podría denominarse el campo intelectual y el campo político-ideológico. Por eso, los intelectuales, sobre todo de las ciencias sociales, asumían como dados los objetivos de su labor. Esta conclusión de fondo, compartida mayoritariamente por los intelectuales que abordan este tema, lleva a que el pensamiento renovado tempranamente promueva la separación entre la teoría y la práctica política.

Las derivaciones de esta conclusión general, sin embargo, fueron múltiples. Apuestas en las que el tenor de la autocrítica adoptaba carices de culpabilidad y autorreferencia -confundiendo la complejidad de la Unidad Popular con la propia biografía-, a menudo partiendo de una interpretación generacional (“sólo ayer éramos dioses”, dice Tironi en 1979<sup>55</sup>), llevaron a opciones extremas como desembarazarse del marxismo<sup>56</sup>. Otras, desde posiciones normativas, apelan a que el intelectual no establezca cursos de acción, sino que únicamente provea diagnósticos y análisis del escenario político, sin perder su independencia<sup>57</sup>. Brunner, por su parte, deriva del análisis de los cursos de transformación introducidos por la dictadura, la conclusión de que el intelectual ya no puede

---

<sup>53</sup> *Ibíd.*, pp. 24-25.

<sup>54</sup> En rigor, la teoría se basaba en la verdad: en aquella construida fundamentalmente por los historiadores marxistas “clásicos” (Jobet, Barría, Ramírez Necochea, Segall), primeros intelectuales en rescatar la acción autónoma de los sectores populares en los hechos y procesos del pasado. Ello, aun cuando su propuesta, permeada de un historicismo mecanicista propio del materialismo histórico que usaban como método, los llevara a una exaltación estructural de las clases “más avanzadas” en detrimento del elemento organizado y socialista entre éstas, suponiendo como dadas, además, tanto la identidad de clase del pueblo como su tendencia a la revolución popular. Véase Thielemann, Luis. “El Movimiento Popular y la historiografía en Chile: elementos para un balance a 40 años del Golpe de Estado”. *Revista de Historia y Geografía*, N°29, 2013.

<sup>55</sup> Tironi, *La torre de Babel*, *Op. cit.*

<sup>56</sup> Moyano, *Op. cit.*

<sup>57</sup> Moulian, *Cuestiones de teoría política marxista*, *Op. cit.*

concebirse portador, a través de su propia práctica, de una ligazón orgánica con las masas, la clase, el partido o el Estado<sup>58</sup>. En efecto, el disciplinamiento autoritario habría quebrado los sentidos compartidos que permitían ese vínculo, como consecuencia de la atomización de una sociedad que busca cada vez más organizarse en función del mercado y de la ausencia de una política integradora y conectiva.

En los años siguientes, al calor del proceso político, estos análisis se radicalizan. Sin embargo, ya no lo hacen criticando la confusión entre las tareas científicas y las políticas, sino derechamente la función social de los intelectuales. Esta vez el debate lo lideran, desde Flacso, el politólogo Ángel Flisfisch con el propio Brunner, en sendos trabajos que analizan el tema. Su crítica gira hacia una lectura de la etapa nacional-popular en clave del predominio de una “intelectualización” de la política. Es decir, de que habría existido un predominio desmesurado de los intelectuales en ella, influyendo en que esta última se convirtiera en una actividad orientada a implantar una verdad sobre la sociedad. Aquello, a juicio de ambos, habría estado a la base del dogmatismo y sectarismo que provocó la polarización que derivó en el golpe militar, pero también en las dificultades que los partidos de la oposición encontraban en esos momentos para concertar una alianza que permitiera salir de la dictadura.

De allí que, haciendo alusión a un rasgo que identifican en la política chilena, señalen lo necesario de extirpar la “inflación ideológica” de ésta. En particular, la función de vanguardia que dentro de los partidos se le daba a la intelectualidad, totalmente contraria al pragmatismo que se exigía a las élites políticas en las tensas horas de la transición, las cuales debían operar con realismo y olvido de las utopías. Olvido que concebían como necesario y posible, tanto por las responsabilidades que suponía la democracia -dado el peligro de supervivencia del autoritarismo y la fragilidad del Acuerdo Nacional de 1985-, como porque, haciendo eco de la más actual teoría social del momento, el mundo experimentaba la “crisis de los metarrelatos”<sup>59</sup>.

Se criticaba, así, como lo explicita Flisfisch, “cuando en la cultura política predomina una interpretación de la política que le asigna el sentido primordial de ser una actividad orientada a implantar en la sociedad una verdad sobre la sociedad, verdad que es vista a su vez como conocimiento racional y que se obtiene racionalmente”<sup>60</sup>. La política habría sido interpretada como simplemente la obra de la actividad intelectual. La izquierda habría pecado de ello al partir de una concepción plenamente racionalista acerca de lo que ésta es y debe ser (una “competencia de utopías”). No obstante, se trataba de un fenómeno transversal a la política chilena, tal como ocurría con un PDC atrapado en un “pragmatismo con utopía” (cuando, en realidad, esa “utopía” no es sino la identidad de su proyecto) y una derecha atrincherada en la defensa de la ortodoxia monetarista. En Chile, por ello, había un modelo de relación entre intelectuales y política de “consejero del príncipe”, en donde estos detentan una influencia decisiva tanto en la vida partidista interna, como en las grandes decisiones y definiciones políticas. A cambio, promueve el “modelo de grupo de presión”, cuya eficacia va desde la

<sup>58</sup> Brunner, *Las imágenes de la sociedad y la mirada sociológica*, Op. cit.

<sup>59</sup> Brunner, José Joaquín. *¿Pueden los intelectuales sentir pasión o tener interés por la democracia?*. Documento de trabajo N°303. Santiago de Chile, Flacso, julio de 1986.

<sup>60</sup> Flisfisch, Ángel. *Algunas hipótesis sobre la relación entre intelectuales y partidos políticos en Chile*. Documento de trabajo N°234. Santiago de Chile, Flacso, enero de 1985, p. 4.

marginación de los intelectuales a una cercanía importante, pero con asimetría a favor del polo político.

De este modo, hacia el último tercio de los años ochenta, de una crítica a la confusión entre verdad y teoría, que habría asumido la relación entre los intelectuales y la política sobre todo en los sesenta, y que, como parte de la autocrítica de estos, habría incidido en la caída de la Unidad Popular, el pensamiento renovado pasa, a raíz del avance de la estrategia de “transición pactada” que gana fuerza en la oposición, a un cuestionamiento general del papel de la intelectualidad en la política chilena del siglo XX.

Un cuestionamiento que, además, conlleva una normatividad sobre cómo debía ser tal relación en adelante, para beneficiar a la oposición articulada, a contrapelo de la “inflación ideológica” del pasado. Al suponer ello la atención a un pragmatismo y moderación, olvido de las utopías y un comportamiento subordinado, en última instancia, a las decisiones de la élite de los partidos (a propósito de la profesionalización de la política), se apela a responsabilidades distintas entre intelectuales y políticos o, al menos, a una transformación de las tareas que los primeros hicieran habitualmente. Es decir, a la separación entre lo intelectual y lo político o, dicho en términos de estratégicos, a la separación entre lucha política y lucha teórica. De pasada, como ya lo insinúan los análisis de comienzos de la década, de algún modo se declara la muerte -o la necesidad de la muerte-, al menos transitoria, del ideólogo y del “intelectual comprometido”, símbolos de la dinámica política del período previo.

Ahora, si bien a primera vista parece al menos paradójal que esta crítica general a la función de los intelectuales en la política chilena la hagan justamente cuadros de la propia élite intelectual que en los años sesenta habrían saturado de “inflación ideológica” la política local, no lo es si se tiene en cuenta que tales cuadros de la izquierda devienen autoridades en los gobiernos civiles. En efecto, en la recuperación del régimen democrático se juegan su propia posición en el espacio social global, pues significaba la recuperación de la posición de privilegio perdida con el golpe de Estado. Dicha posición, como advierte Alvear, se liga mucho más al régimen político que al modo de producción o al proyecto socioeconómico en curso, pues ella representa la provisión de espacios de representación política, de cargos dirigentes en el aparato del Estado, el reintegro a las universidades y la revalorización social de un saber y prácticas que se habían formado y moldeado para su aplicación desde el ámbito estatal<sup>61</sup>.

De algún modo, entonces, la pretendida crítica del pasado, en la que incluyen su propia autocrítica, y que encuentra en el análisis de la relación entre intelectualidad y política una línea de argumentación relevante, es funcional a su propia transfiguración de intelectuales del proceso de transición a responsables y continuadores del mismo. Legitiman, así, su propia hegemonía en los campos intelectual y político. Un ejemplo patente de lo que ha destacado Morales para América Latina, en referencia a cómo la intelectualidad que participa de los centros de estudio de la oposición a las dictaduras en el Cono Sur termina siendo defensora y articuladora de sus propias ideas, sin mediaciones<sup>62</sup>. Lo interesante, sin embargo, en la experiencia chilena es que prácticamente la misma generación que lideró el proceso de activación social y política al que reacciona el autoritarismo es la que

---

<sup>61</sup> Alvear, *Op. cit.*

<sup>62</sup> Morales, Juan Jesús. “Entre la ciencia y la política: la forja de una élite intelectual latinoamericana”. *Revista de Ciencia Política*. Vol. 34, N°2, 2016.

luego se valida a sí misma como conductora del proceso de transición y, más tarde, de los gobiernos civiles.

### 3. Una élite político-intelectual transversal para la transición chilena

La renovación socialista fue más una renovación en las alianzas políticas que en el campo intelectual<sup>63</sup>. En este último se paralizó, dando cuenta de la crisis general del campo socialista que también la alcanza. Es por ello por lo que, tras el ideario socialista, sigue un análisis de la modernidad desde categorías liberales, un abordaje de la realidad social en que predomina el ámbito estrictamente político, con escisión de consideraciones sobre la estructura social y económica. Lo político, así, reduce la consideración a un ciudadano con abstracción de su condición social.

Sin embargo, para que se produjera tal renovación ese proceso debió acompañarse de una redefinición del carácter social de la política. Una ideológicamente sustentada en la doble fractura de lo social y de lo intelectual con lo político. En particular, porque aquella renovación de las alianzas encarna -más allá de la convergencia entre el PS y el PDC- en una élite político-intelectual transversal, que excede las identidades de apoyo al régimen o a la oposición, y que tiene como horizonte no sólo encabezar y definir los términos de la transición a la democracia, sino proyectar hacia los gobiernos civiles una concepción específica de la política (y, en particular, de la democracia) cuyo eje es la exclusión de la deliberación democrática y el cuestionamiento a la acción colectiva para la defensa de intereses sociales.

En la formación de tal élite transversal cumple un papel fundamental el diálogo y la socialización que, entre personeros del oficialismo y de la oposición, se produce en los centros académicos privados y *think tanks* de uno y otro sector, y a partir de lo cual se pavimenta el lento camino hacia una propuesta consensual que encarrile definitivamente la transición<sup>64</sup>. En reuniones y seminarios se genera un intercambio que impone como normas de la negociación, por una parte, la necesidad de coordinar el cambio institucional con estabilidad y continuidad política, esto es, con gradualidad y secuencialismo; y, por otra, que el cambio en el pensamiento político de la oposición se oriente pragmáticamente, asumiendo una racionalidad acorde a la estructura de oportunidades existente, sin buscar salirse de esos marcos<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Ruiz, "Socialismo y libertad: notas para repensar la izquierda", *Op. cit.*

<sup>64</sup> Huneus, *Op. cit.* Además de Flacso y SUR, se encuentran: la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina (Cieplan), el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), el Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (Ceneca), el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), la Academia de Humanismo Cristiano, el Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales (Ilades), el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), el Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional (Clepi), el Programa de Economía del Trabajo y el Centro de Estudios Públicos (CEP). Véase Puryear, Jeffrey. *Op. cit.* y Lladser, María Teresa. *Centros privados de investigación en Chile*. Santiago de Chile, AHC - Flacso, 1986.

<sup>65</sup> Boeninger, Edgardo. "Bases de un orden económico para la futura democracia en Chile". *Estudios Públicos*, n°22, 1986.



Este pensamiento se nutre de la escisión entre concertación política y concertación social. En el caso de la primera, partiendo de la certeza de que los momentos de progreso y desarrollo político habrían devenido en Chile como resultado de altos grados de gobernabilidad, control social y capacidad sistémica para excluir la conflictividad social que perturbaba la institucionalidad. En el caso de la segunda, referida a cierto modo específico de integración vertical y horizontal, capaz de proporcionar control social para el perfeccionamiento de las instituciones, en base a acuerdos estratégicos y sustantivos<sup>66</sup>. Claves ambas de aquella estrategia que asume que la salida a la dictadura sólo puede ser política, lo que, en los términos instalados, significaba un acuerdo entre élites<sup>67</sup>.

Desde 1983 se profundiza la lejanía de la renovación socialista con el pensamiento de la izquierda y sus banderas tradicionales. Ello se produce con la recuperación de nuevas fuentes teóricas, algunas desconocidas o despreciadas por la izquierda, como Gramsci o el liberalismo de Parsons, Weber o incluso Hayek<sup>68</sup>. Ello inicia un gradual desplazamiento hacia la democracia liberal y la “economía de mercado”, al valorarse las instituciones “formales” de la sociedad burguesa y al mercado como el más eficiente asignador de recursos<sup>69</sup>. Se trata de un giro ideológico originado en el trabajo de intelectuales y políticos que se desempeñan en los centros académicos independientes y *think tanks*, dentro y fuera de Chile, que acompañan el proceso de construcción programática en la oposición. Una parte solamente de las funciones que cumplen estas instituciones, que también sirven para el reclute de activistas y dirigentes, la formulación de críticas al régimen y la promoción de diálogos y encuentros que ayudan a la convergencia de los partidos. Es una especificidad chilena el gran número que alcanzan en dictadura, explicado por la tradición de cercanía de los intelectuales con los políticos en Chile y la cooperación, fraguada antes de 1973, entre académicos de universidades y profesionales de organismos internacionales con los principales dirigentes del PDC y el PS<sup>70</sup>.

La abundancia que en este ámbito muestran los partidos de la oposición, sin embargo, ha invisibilizado el rol clave que también cumple el Centro de Estudios Públicos (CEP) en el proceso de transición a la democracia. Este *think tank*, fundado en 1980 por un grupo de ex funcionarios de la dictadura y otras personalidades de la derecha, nace como respuesta a las críticas desplegadas por instituciones como Cieplan y Flacso a las políticas del gobierno y a la ortodoxia de su gabinete económico<sup>71</sup>. Interesados en institucionalizar el régimen político prefigurado en la Constitución de 1980, invocan la presunta legitimidad del pensamiento conservador de los países del Primer Mundo en apoyo a sus posiciones. Lo hacen invitando a conferencistas y personalidades académicas y

---

<sup>66</sup> Boeninger, Edgardo. *Democracia en Chile. Lecciones de gobernabilidad*. Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1997.

<sup>67</sup> Mella, Marcelo. “Los intelectuales de los centros académicos independientes y el surgimiento del concertacionismo”. *Revista de historia social y de las mentalidades*, Vol. 1, N°13, 2008.

<sup>68</sup> Moyano, *Op. cit.*

<sup>69</sup> Lechner, Norbert. *Los patios interiores de la democracia*. Santiago de Chile, FCE, 1990.

<sup>70</sup> Huneus, Carlos, Rodrigo Cuevas y Francisco Hernández, *Op. cit.*

<sup>71</sup> Jara, Maximiliano. “Importando (neo)liberalismo en Chile: el caso del Centro de Estudios Públicos (1980-1990). Un proceso de legitimación intelectual”. Ponencia presentada en las *XVI Jornadas Interescuelas/departamentos de Historia*. Mar del Plata, agosto de 2017.

políticas europeas y norteamericanas a sus aulas, y editando la revista *Estudios Públicos*, cuyo objetivo inicial es dar una versión “nacional” de las posiciones neoconservadoras para abogar en favor del proyecto de democracia “autoritaria”<sup>72</sup>.

En sus primeros tres años, el CEP reivindica, a través de las actividades mencionadas, una versión del liberalismo apegada a la tradición anglosajona, a contracorriente de lo que sus líderes consideran la variante “contaminada” predominante en el liberalismo criollo y latinoamericano, más proclive a la tradición francesa, racionalista y constructivista. Defienden el principio de espontaneidad social de la tradición británica, cuya idea de libertad, definida como “ausencia de coacción ajena”, se alza como un valor superior a la democracia entendida como toma de decisiones colectivas. Una idea que encuentra su mayor expresión en el libre intercambio de bienes y servicios, a contrapelo de la tradición francesa que, entendiendo a la libertad como “capacidad de hacer”, considera a la democracia como un ideal político superior a la libertad, y encuentra su mejor expresión en el espacio de la política o decisiones grupales<sup>73</sup>.

En el CEP, entonces, se fragua una idea de libertad que, vinculada solo a lo mercantil, la reduce a una libertad económica cuyo trasfondo es la desconfianza o rechazo a la deliberación democrática y, con ello, a la propia tradición del liberalismo político. En esta última sí se propicia lo colectivo, por ejemplo, mediante los derechos o la promoción de los partidos, que suponen la defensa de intereses sociales a través de agrupaciones voluntarias participantes del sistema político. Un tipo de libertad, por tanto, afín a la peculiar interpretación de la democracia que sostienen los ideólogos del régimen, como un asunto restrictivo, autoritario o “protegido”, que hace honor a la tradición latinoamericana de otorgar sentidos autoritarios a este fenómeno<sup>74</sup>.

A raíz del cambio en la conducción del centro, de las complicaciones financieras que la crisis económica genera al afectar a sus principales donantes empresariales (Fernando Larraín, Javier Vial, José Borda y Jorge Ross) y del interés de la oposición por abocarse al problema de la democracia, dado el escenario de presiones al que se ve sometida la dictadura, el CEP pasa de la difusión del pensamiento neoliberal foráneo a invitar a sus salones a políticos y estudiosos -chilenos y extranjeros- del proceso transicional, en un intento por integrarse y liderar el debate que hegemoniza la segunda mitad de los años ochenta. Se transforma, así, desde 1983, en un espacio de diálogo y de construcción de puentes

---

<sup>72</sup> Maira, Luis. “Nota preliminar sobre la influencia (creciente) del pensamiento de la nueva derecha norteamericana en América Latina”. *Revista Mexicana de Sociología*. N°23, 1981.

<sup>73</sup> Esta distinción entre la libertad de la tradición liberal británica y la de la tradición liberal continental -que Maximiliano Jara atribuye en Chile al trabajo de uno de los fundadores del CEP, Arturo Fontaine Aldunate- es prácticamente igual a la hecha por Friedrich Hayek en una conferencia de 1966, publicada por *Estudios Públicos*. Hayek es uno de los invitados internacionales más comprometidos con el CEP, llegando a ocupar el cargo de presidente honorario. Ahora bien, lo importante es el interés que subyace en la participación de varios académicos extranjeros en esta institución: el carácter experimental de la experiencia neoliberal chilena, toda vez que concentran sus esfuerzos en promover que el CEP evalúe las políticas públicas inspiradas en el monetarismo de Chicago, que lleva adelante la dictadura. Véase Jara, *Op. cit.*

<sup>74</sup> Rouquié, Alain. *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*. Buenos Aires, FCE, 2011.

mediante la academia, a partir del tratamiento de temas como la institucionalidad política y el ámbito económico. Una nueva preocupación por lo nacional, que conlleva que los académicos extranjeros ya no sean convocados sólo para cohesionar a grupos de interés y/o periodistas en torno a la ideología neoliberal, sino para que su conocimiento guíe a los investigadores del centro en la elaboración de posiciones propias sobre el tema de la democracia<sup>75</sup>.

Esta discusión, de todos modos, es tratada con cautela por los representantes y benefactores del CEP, pues, más allá del cambio de régimen político, lo que anima su injerencia en el debate transicional es que la redemocratización no ponga en peligro el modelo económico implantado<sup>76</sup>. De allí que, pese a la reorientación de su actividad político-intelectual tras la crisis, los primeros años del centro provean parte importante de los principios sobre los cuales se construyen sus visiones propias sobre la democracia, en concordancia con la opción por el liberalismo anglosajón, no constructivista, y apegado al vínculo entre libertad y mercado.

Con todo, esta reorientación institucional es importante porque produce una apertura hacia la intelectualidad y los políticos de los partidos de oposición. El CEP, por ello, al igual que otros centros académicos privados o *think tanks*, juega un papel clave en el intercambio que delimita los términos de la transición. Lo hace, además, en la definición de la élite que conduce este proceso y que excede a la oposición, al requerir de los apoyos que sectores del oficialismo le proveen. Una élite transversal que descubre sus puntos de encuentro en los motivos ideológicos que pregonan y constituyen, de algún modo, síntesis independientes de los procesos de construcción político-intelectual que ellas viven en dictadura: por una parte, una restrictiva idea de libertad y, por otra, una concepción elitista de la política. Ambos motivos sustentan los contenidos de la estrategia de “transición pactada”.

Ahora bien, esa mezcla es posible no, como señala Arturo Fontaine Talavera -histórico director del CEP y uno de los impulsores de este encuentro-, por una “penetración horizontal” del liberalismo político y económico a partir de una *mediación cultural* que, en los debates entre opositores y partidarios del régimen militar, habría producido el “triumfo de las ideas liberales” en el seno del socialismo<sup>77</sup>. Lo es, más bien, por la crisis del marxismo a nivel internacional y, así, por la falta de alternativas ideológicas existente. Es posible, además, justamente por su carácter elitario, es decir, porque si bien la crisis de alternativas ideológicas es general, la penetración de los motivos del peculiar neoliberalismo chileno no afecta al conjunto de la oposición, sino a la parte que finalmente es capaz de construir la teoría política de la transición.

En definitiva, debido al carácter elitario de este intercambio político-intelectual y al rumbo acelerado que adopta el proceso de transición a la democracia en la segunda mitad de los ochenta, se crean las condiciones para una afinidad electiva entre libertad mercantil y política elitista, permitiéndose, social e ideológicamente, el maridaje de los que antes eran adversarios. Es en los salones

---

<sup>75</sup> Jara, *Op. cit.*

<sup>76</sup> *Ibíd.*

<sup>77</sup> Fontaine Talavera, Arturo. “Sobre el pecado original de la transformación capitalista chilena”. Barry Levigne (comp.). *El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina*. Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1992.

del CEP donde se define lo que se ha llamado el “concertacionismo”<sup>78</sup>. De paso, también se fragua allí el prestigio de este centro, que luego sigue cumpliendo un papel articulador en el debate público chileno<sup>79</sup>.

#### 4. El curso forzado de las tareas intelectuales de la política

La imposición de un consenso elitario para transitar a la democracia tiene como condición de posibilidad la mantención de la desarticulación social y política heredada de la dictadura. Esta es la decisión política que determina el derrotero de las décadas siguientes en Chile, y, especialmente en los años noventa, constituye la base sobre la cual, en ausencia de actores sociales gravitantes, la Concertación de Partidos por la Democracia -la alianza en el poder- renuncia a un tipo de Estado cuyo carácter social se juegue en la articulación de un pacto social diverso, apostando por un pacto elitario que, para su sobrevivencia, necesariamente debe concentrar las decisiones políticas sustantivas en una pequeña fracción social, en consonancia con la exclusión del resto de la sociedad<sup>80</sup>.

Tal desarticulación heredada está a la base de la “governabilidad democrática”, cuya defensa torna a la transición chilena en una de las más conservadoras de América Latina<sup>81</sup>. La “política de los acuerdos”, en que fluyen los consensos entre las nuevas élites civiles, los grupos empresariales y las garantías otorgadas al repliegue militar, caracterizan a una transición marcadamente elitista y eminentemente procedimental, en donde se proyecta hacia adelante una brecha entre lo social y lo político<sup>82</sup>. En los noventa, acusando de otro modo el supuesto peligro de su irrupción, la exclusión popular se justifica en la preservación del crecimiento económico y la estabilidad de la transición<sup>83</sup>. Un ideologismo que hace abstracción del carácter y los efectos sociales diferenciados de tal situación, sustrayéndose muchas funciones estatales de la política abierta, al ser presentadas como “técnicas” y “apolíticas”<sup>84</sup>.

Es así como avanza una “autonomización de la política”, efectiva en tanto se mantiene la desarticulación, que permite, a diferencia de otros países de la región, que los cambios económicos y sociales no constituyan fuentes de inestabilidad en la transición chilena<sup>85</sup>. Se concibe el fortalecimiento del sistema de partidos como autonomización de las fuerzas sociales, sustrayéndose de estas entidades la promoción de intereses. Solamente el empresariado, en tanto grupo de presión que puede proyectar la defensa de sus intereses a través de los partidos o sobrepasar la mediación de estos, queda expresado en el sistema político. La clientelización de las bases sociales de los partidos, por otro lado, una vez en el gobierno, agudiza la pérdida de sentido de toda militancia, favoreciendo aún más el divorcio entre

---

<sup>78</sup> Mella, *Op. cit.*

<sup>79</sup> Véase, por ejemplo, Bustamante, Andrés y Sebastián Caviedes. “El papel de la tradición: la influencia empresarial del grupo Matte”. *Cuadernos de Coyuntura*. N°8, junio de 2015.

<sup>80</sup> Ruiz, Carlos. *De nuevo la sociedad*. Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2015.

<sup>81</sup> *Ibíd.*

<sup>82</sup> Lechner, *Op. cit.*

<sup>83</sup> Boeninger, *Democracia en Chile, Op. cit.*

<sup>84</sup> Moulian, Tomás. *Chile Actual. Anatomía de un mito*. Santiago de Chile, Lom Ediciones, 1997.

<sup>85</sup> Ruiz, *De nuevo la sociedad, Op. Cit.*

política y sociedad, responsable de una política ensimismada. Con ello se debilita la capacidad representativa de esta última, que se reduce a administrar los consensos impuestos<sup>86</sup>.

Con todo, ideológicamente, en la medida que la decisión política de reproducir la desarticulación heredada emerge como consecuencia de un acuerdo elitario, la construcción hegemónica de la alianza en el poder se torna un proceso aún más arduo. Un problema capital de los gobiernos civiles es legitimar este acuerdo suscrito entre antiguos adversarios. Ahora bien, en tanto la desarticulación se profundiza y no sólo se mantiene, y como contraparte se asienta la afinidad entre las élites que excluyen a las mayorías de las decisiones políticas sustantivas, se aísla en buena medida a los grupos político-intelectuales ajenos a la esfera del poder inmediato. Sumado a la crisis de las alternativas políticas que se extiende mundialmente, en los años noventa se impone la opacidad en el campo intelectual chileno. Y es que, salvo debates aislados, predomina una orientación casi exclusivamente cortesana del trabajo de los intelectuales<sup>87</sup>, y, por ello, contenidos ideológicos que justifican o apologizan los efectos sociales de la iniciativa estatal o que, criticándolos, no alcanzan a poner en entredicho los fundamentos del tipo de Estado y del modelo de desarrollo sobre los cuales se orienta esta iniciativa.

Ahora bien, hablar de las tareas intelectuales de la política es hablar de una dimensión ineludible de ésta última: la elaboración de idearios y de contenidos programáticos que se impulsen como legítimos y deseables, sea que éstos tengan una orientación transformadora o conservadora del orden vigente. Hablar, por otro lado, de imaginación política, implica reconocer que la política goza de una dimensión proyectual, que excede lo coyuntural, en la cual asoman debates sustantivos acerca del tipo de sociedad que se espera hacia el futuro.

En el Chile de la postdictadura, la mantención y profundización del modelo económico y de la exclusión política, que materializa como algo permanente la escisión entre lo social y lo político y entre lo político y lo intelectual, sin embargo, hace entrar en crisis tales dimensiones, en tanto el divorcio de la política con la sociedad niega a la intelectualidad un soporte social sobre el cual construir y proyectar su pensamiento. Como resultado de la autonomización de la política, las bases sociales pierden importancia en las orientaciones de la producción ideológica de la élite política de izquierda, tomando su lugar otras referencias como la Iglesia Católica, el centro político representado por el PDC, la comunidad intelectual internacional, las agencias extranjeras de cooperación y el empresariado<sup>88</sup>. Este deterioro de la política, por ello, potencia la capacidad de determinación de “poderes extrainstitucionales” sobre el rumbo económico, la dirección cultural y en el dominio de los espacios de base de la sociedad<sup>89</sup>.

Con todo, esa lejanía, que impide pensar la política como disputa de proyectos de sentido, no implica una desaparición de las tareas intelectuales de ésta. Siendo irrenunciables, ellas se realizan de otro modo. En Chile, en particular, a partir del ensimismamiento señalado, se impone el procesamiento tecnocrático,

---

<sup>86</sup> Baño, Rodrigo y Enzo Faletto. *Transformaciones sociales y económicas en América Latina*. Santiago de Chile, Cuadernos de Departamento de Sociología, Universidad de Chile, 1999.

<sup>87</sup> Faletto, “Enzo Faletto rompe tres décadas de silencio”, *Op. cit.*

<sup>88</sup> Alvear, *Op. cit.*

<sup>89</sup> Cortés Terzi, Antonio. *El circuito extrainstitucional del poder*. Santiago de Chile, Ediciones ChileAmérica – Cesoc, 2000.

potenciándose con ello el papel de los *think tanks* en el contexto democrático. Ello ocurre porque tales organizaciones promueven un estilo de deliberación y acción política separado del efectuado al interior de los partidos, así como una visión de la política entendida en un sentido limitado, como preparación de políticas públicas, que no toma en cuenta los apoyos de la población<sup>90</sup>. En los años noventa, el interés por proyectar hacia adelante la desarticulación heredada reduce las tareas intelectuales a una formulación programática eventual -recluida, sobre todo, a los contextos eleccionarios- o como parte de una estrategia de legitimación de la democracia. Ello da predominio a tales instituciones privadas, haciendo que, por sus estrechos dominios, corran los contenidos de la agenda pública, al tiempo que de ellos obtienen los partidos sus bases programáticas y, en no pocos casos, reclutan a sus intelectuales y técnicos.

Se vuelve, así, a una situación similar a la de los centros académicos privados anteriores a 1973, cuando, sin aspirar a tener una función académica - puesto que se entendía que ella radicaba en las universidades-, llevan adelante estudios sobre aspectos clave de la realidad chilena, convocan a especialistas para discutir sobre un tema u otro y preparan propuestas de reforma social. En la postdictadura, sin embargo, tales labores se cumplen valiéndose de una posición hegemónica que no necesita, como antaño, comprometer sus temas de análisis y de debate con los problemas de la ciudadanía o, mejor aún, con las bases sociales de los partidos a los que se deben y pertenecen, cuestión clara en tanto operan antes como fundaciones políticas que como centros académicos<sup>91</sup>.

Esa aparente impermeabilidad social de los *think tank* les permite a sus miembros y defensores referir su predominio a las supuestas exigencias de la modernidad y de una indeterminada globalización, y sus opiniones a una “neutralidad técnica” que intenta mostrarse abstraída de los intereses partidarios, económicos o religiosos a los que siempre están vinculadas tales instituciones. Sin ir más lejos, al considerar intereses sociales específicos, no hay contrapesos a la capacidad del gran empresariado para hegemonizar la agenda pública con su visión de mundo e intereses, en concomitancia con unos medios de comunicación altamente concentrados. Al encontrarse la realización de las tareas intelectuales de la política en el mundo de los centros de pensamiento, queda el camino libre para el fortalecimiento de las tecnocracias. Se trata de una “tecnocratización” cuyo corolario es el desahucio de los aspectos proyectuales de la política, por el cual se niega o transforma la dimensión intelectual de ésta, resultando su reducción a un marginal papel administrativo del orden existente.

Tal fenómeno, que tiene como producto político-ideológico la mencionada crisis imaginativa, se erige al alero de cambios sociales y organizacionales fraguados ya en la misma instalación del neoliberalismo chileno. Y es que es allí cuando circunstancias transitorias y propias de la resistencia política e intelectual de los años ochenta, que definieran actores y espacios concretos para mantener y dar curso a las tareas intelectuales de la política, se convierten en la forma permanente de procesar tales labores en la década siguiente, en nombre de una opción específica de transitar a la democracia. Más aún, en base a los aspectos normativos de tal opción, se niegan los elementos democráticos y esencialmente políticos que les subyacen, en consonancia con el cambio que experimentan los

---

<sup>90</sup> Huneus, Cuevas y Hernández, *Op. cit.*

<sup>91</sup> *Ibíd.*

partidos políticos y el cuestionamiento que se hace a la actuación de los ideólogos dentro de éstos.

La autonomización de la política respecto a la sociedad va a expresarse no sólo como un paulatino vaciamiento intelectual y social de los partidos - especialmente de la Concertación-, sino también en relación con el peso que alcanzan los economistas monetaristas en las definiciones de política económica y social. En tal escenario, un rasgo propio del caso chileno es la participación orgánica de los *think tanks* en su etapa de formulación, resultado de la convocatoria del Poder Ejecutivo a participar de un ámbito de debate con áreas del gobierno; mientras, en el monitoreo y evaluación, estas organizaciones actúan de un modo más espontáneo, en función de razones dadas más por necesidades del gobierno o de la oposición, según sea el caso<sup>92</sup>.

Hacia los años dos mil, este precario equilibrio entre política y tecnocracia, que venía cerrando cada vez más espacios a las bases sociales de los partidos, se profundiza. A la externalización de las tareas intelectuales de la política en organizaciones privadas como los *think tanks*, se suma una colonización del Estado y los gobiernos por figuras externas a los partidos, agrandándose la crisis intelectual de estos a una de carácter orgánico, dada su incapacidad para proyectar cuadros a la arena del poder. En particular, desde el gobierno de Ricardo Lagos, bajo el argumento de profesionalizar, dar predominio al mérito y a la evaluación del personal y despolitizar la selección de los altos directivos del Estado, se impulsa un crecimiento ininterrumpido del porcentaje de individuos que, provenientes del mundo privado, entran al sector público<sup>93</sup>. Esa situación, unas de las fuentes que explica el fenómeno de la circulación público-privada, hace cada vez menos significativa la militancia para la obtención de los cargos de peso, aun cuando se mantiene la discrecionalidad política en el nombramiento de estos<sup>94</sup>. Así, se agudiza el vacío programático y representativo de los partidos, como resultado de una decisión política explícita de privilegiar lo técnico por sobre lo político. Ello, como contraparte, profundiza la debilidad de los partidos ante las presiones de un empresariado que las camufla en metáforas de consenso y saber tecnocrático.

En definitiva, asociado a la desvinculación entre proceso social y proceso político, provocada en Chile por las definiciones que los “teóricos de la transición” instalan en los años ochenta y proyectan luego como élite en el poder, se produce una desestructuración de las tareas intelectuales que hace que las mismas terminen fluyendo por canales que no miran a la sociedad, sino que agotan su discusión en su propio ensimismamiento. Esto fortalece a las tecnocracias, cuyo mundo de referencia es o la reproducción de la estructura de dominación o el

---

<sup>92</sup> Uña, Gerardo, Carina Lupica y Luciano Strazza. “Think tanks y pobreza en América Latina: el rol de los pensadores en el mercado de las políticas sociales en Argentina, Chile y México”. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*. N°44, junio de 2009.

<sup>93</sup> Véase el crecimiento del porcentaje de nombrados a través del SADP que proviene del mundo privado en los Balances de Gestión Integral de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Allí, hacia diciembre de 2010 (último año de gobierno de Bachelet), de los directivos nombrados en el primer nivel jerárquico, un 13% provenía del sector privado. Cifra que crece en diciembre de 2011 (18%) y en diciembre de 2013 (27%).

<sup>94</sup> González-Bustamante, Bastián, Alejandro Olivares, Pedro Abarca y Esteban Molina. “Servicio civil en Chile, análisis de los directivos del primer nivel jerárquico (2003-13)”. *Revista de Administração Pública*. Vol. 50, N°1, enero-febrero de 2016.

desinterés por ella. Y, a la vez, debilita la posición de los intelectuales, por cuanto siendo el suyo el mundo social, una política desarticulada les torna difícil subsistir.

## 5. Política sin sociedad y renuncia a la imaginación política

La “intelectualidad orgánica de la democracia” es una fuerza político-intelectual que, reciclándose a sí misma -vía conversión política, pragmática o ideológica- para transformarse en élite del poder de los gobiernos civiles, reproduce sus cuadros y visión de mundo al alero de una perspectiva reducida de la democracia que los beneficia en aquella empresa. Tratándose de un grupo heterogéneo social y políticamente, ideológicamente produce una interpretación que naturaliza las transformaciones heredadas de la dictadura, cerrando el debate sobre el modelo de desarrollo y la concepción de Estado, a partir de los ideologismos de la gobernabilidad democrática (o peligro a la reversión autoritaria) y de la modernización. Esto lo hace a través de *think tanks* y centros de estudios, instituciones educativas y partidos políticos que reproducen tal discurso.

Respecto a esto último, es propio de la experiencia chilena la centralidad que en la política de las últimas tres décadas adquieren este tipo de agrupaciones ajenas a la deliberación democrática -definidas así por ser expresivas de élites que encuentran sus criterios de legitimidad y autoridad no en mayorías sociales o políticas, sino que en ellas mismas-, fruto del nivel más general de las relaciones sociales de dominación existentes durante este período. En efecto, instituciones privilegiadas como las universidades, las academias, las instituciones culturales nacionales, los sistemas culturales públicos, son instrumentos indispensables de la producción de las ideas y prácticas de un orden revestido de autoridad. Juegan un papel fundamental en la definición de los sistemas filosóficos, literarios y culturales fundamentales y, de modo más profundo, en la definición, por selección, de la naturaleza y objetivos del trabajo cultural, aun cuando incluyan elementos de disensión o de oposición<sup>95</sup>. De tal suerte, si las agrupaciones mencionadas son fundamentales en la postdictadura, es por la naturaleza del acuerdo previo que sustenta la posibilidad de este hecho: el pacto de la transición, esto es, el carácter social excluyente (o elitario) de la democracia posible, define la centralidad de estos en el devenir de la política chilena del último tiempo. Y no al revés, como plantean otros trabajos de referencia<sup>96</sup>.

Particularmente importante para la consolidación del giro neoliberal chileno es, además, la reversión que tal transformación comporta para el tipo de relación entre intelectualidad y sociedad predominante en la etapa nacional-popular, radicalizada en el ciclo modernizador de los años sesenta y setenta. Y es que, con antecedentes en los acercamientos de socialistas, comunistas y ácratas con los sectores populares en los años veinte del siglo pasado, lo que hay, particularmente en la década y media que abarca el período 1958-1973, es un estrechamiento del lazo entre intelectualidad y fuerzas sociales organizadas (sobre todo con mediación de los partidos políticos), que es inédito -en el derrotero de una intelectualidad de tradición funcionarial del Estado, reacia a ceder sus privilegios- y que es roto por los términos sociales y políticos excluyentes del pacto

<sup>95</sup> Williams, Raymond. *Sociología de la cultura*. Barcelona, Paidós, 1994.

<sup>96</sup> Huneeus, Cuevas y Hernández, *Op. cit.*



de la transición, definidos justamente por la élite político-intelectual que hegemoniza al PS y al PDC.

Esta ruptura está estrechamente ligada a la crisis de la imaginación política en Chile, que es la forma específica en que se produce el giro intelectual en este país. Una anclada en las transformaciones sociales, políticas y culturales de las últimas décadas y cuyo centro está en el desahucio de los aspectos proyectuales de la política. Una, en fin, que abarca hoy a todo el espectro político, y no solo a la izquierda, a raíz de la crisis de representatividad que se vive.

En una política sin sociedad, los actores que han asumido las irrenunciables tareas intelectuales de la política han ido alejándose cada vez más, en sus temas y preocupaciones, de la figura del intelectual. Al operar sólo como ejecutores de objetivos definidos de antemano por el poder existente, quienes hoy despliegan simultáneamente las habilidades del político y del científico dejan de ser los intelectuales de antes y pasan a engrosar la lista de nuevos derivados de la tecnocracia definidos por las ciencias sociales (*tecnoburócratas*, *tecnhopols*, etc.). Antiguos personajes de la tradición política chilena y latinoamericana, como los ideólogos, anclados a fuerzas organizadas, parecen en retirada. Y es que superar la mera reproducción de contenidos predeterminados en favor del desarrollo de la imaginación política sólo es posible al reconstruirse el vínculo entre proceso social y proceso político.

En relación con esto último, el abismo entre política y sociedad ha conllevado, por último, la irrupción de una forma particular de pensar la política, cuyo corolario es la separación entre lucha teórica y lucha política. Una separación que, siendo falsa, ha permeado sobre todo en los sectores subalternos, en virtud del propio debilitamiento que han experimentado las estructuras que históricamente expresaron y representaron sus intereses, horadando su capacidad para mirar la realidad social desde una perspectiva propia y no funcional a otros sectores.